América Latina en la espiral de la crisis

Francisco Proaño Arandi[1]

[1] Embajador de carrera del Servicio Exterior ecuatoriano (sp).

El continente latinoamericano enfrenta una suerte de arco de la crisis o, más exactamente, una vertical que abarca países como Haití, Nicaragua y, con mayor virulencia desde octubre de 2019, los que integran la región andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ya a finales de septiembre, un profundo enfrentamiento político sacudió al Perú, cuando una mayoría de parlamentarios fujimoristas intentó forzar la situación institucional, procurando la elección de un mayor número de miembros del Tribunal Constitucional, con el evidente propósito de echar al traste los procesos que se siguen contra la corrupción y en la que están involucrados hasta cinco expresidentes de ese país, incluyendo los principales líderes de las bancadas opositoras. El actual mandatario, Joaquín Vizcarra, resistió el embate y contraatacó disolviendo el Congreso, con lo que se ha logrado una relativa calma.

Pocos días más tarde estallaría una crisis sin precedentes en el Ecuador. La decisión de suspender el subsidio a los combustibles, como medida para recomponer el grave déficit fiscal que acosa al Gobierno de Lenín Moreno –pero que no fue adecuadamente consensuada con los diversos sectores sociales– fue el detonante para una violenta reacción que tuvo como clímax la movilización indígena que por casi 12 días sitió la capital ecuatoriana y, en realidad, el país entero, dando lugar a hechos de terrorismo político que no habían sido vistos en episodios anteriores. Tal fue, por ejemplo, el ataque e incendio del edificio de la Contraloría General del Estado, con la evidente consigna de destruir los expedientes relativos a los hechos de corrupción que se encuentran judicializados y en los que aparecen comprometidos diversos funcionarios del régimen de Rafael Correa, empezando por el propio exmandatario. Lo que parece real es el aprovechamiento de la movilización indígena por parte de células de signo correísta para desestabilizar el país, en una acción soterrada, bien coordinada y mejor financiada que al momento es investigada por instancias de la justicia ecuatoriana.

Pocos días más tarde, la elevación de las tarifas del metro de Santiago de Chile provocaría un estallido social de características sumamente violentas, tanto por parte de los órganos oficiales de represión, como de los manifestantes, y que dura hasta cuando se escribe este artículo (fines de noviembre 2019), pese a que el Gobierno cedió en la demanda central de los dirigentes opositores: el inicio de un proceso tendiente a sustituir la actual Constitución, adoptada en 1980 por la sangrienta dictadura militar de Pinochet.

Casi coetáneamente, el evidente fraude electoral perpetrado por el presidente Evo Morales en Bolivia, con la clara intención de perpetuarse en el poder, dio lugar a manifestaciones particularmente violentas que, como en el caso de Chile, no terminan de suceder. La renuncia de Morales solicitada por las Fuerzas Armadas acentuó la violencia, esta vez por parte de sus partidarios, si bien se han dado ya algunos signos de una posible pacificación como resultado de las conversaciones mantenidas entre la presidenta interina, Jeanine Áñez, y la nueva oposición, afín a Morales. Al respecto, cabe señalar que para las Fuerzas Armadas debió ser moralmente difícil mantener su apoyo a un presidente del que quedó demostrada, casi de manera flagrante, su autoría en el hecho.

El paro nacional que conmociona a Colombia desde el 21 de noviembre, y que se sustenta en diversas reivindicaciones políticas, económicas y sociales, ha cobrado también características de violencia generalizada, acentuadas por la muerte del joven estudiante Dilan Cruz, que muchos definen como un crimen de Estado. No puede pasarse por alto que la espiral de violencia en Colombia tiene también una causa macabra: la sucesión de ejecuciones selectivas de dirigentes sociales, perpetradas al socaire de los acuerdos de paz que no parecen lograr su objetivo pacificador, al no ser acatados por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

Venezuela, obviamente, constituye, con movilizaciones o no, punto focal de la crisis, habida cuenta del descalabro humanitario que vive ese país y cuya muestra más clara es el éxodo forzado de casi cinco millones de personas, total que, según los organismos internacionales, se alcanzará en 2019.

Algunas conclusiones

De esta visión panorámica se deducen varias conclusiones, siquiera provisionales. En primer lugar, que las causas inmediatas o coyunturales de los estallidos sociales producidos en cada uno de los países nombrados son diferentes.

De esta visión panorámica se deducen varias conclusiones, siquiera provisionales. En primer lugar, que las causas inmediatas o coyunturales de los estallidos sociales producidos en cada uno de los países nombrados son diferentes. Sin embargo, hay un fondo común en casi todos los casos: la existencia de una generalizada frustración frente a la persistencia de altos niveles de inequidad e injusticia social en la región

Sin embargo, hay un fondo común en casi todos los casos: la existencia de una generalizada frustración frente a la persistencia de altos niveles de inequidad e injusticia social en la región, incluso en Chile, un país considerado como exitoso en su comportamiento económico externo, pero que evidencia, como lo demuestra la conflictividad social que observamos en estos días, profundas desigualdades. En contrapartida, el caso de Bolivia es diferente: allí, el Gobierno de Evo Morales desplegó una estrategia económica que puede calificarse de exitosa, pero que no bastó para propiciar la continuación de su administración sobre todo por el afán mesiánico de eternizarse en el poder. Utilizo intencionalmente el término mesiánico, dadas sus diferentes acepciones.

Por una parte, la llegada a la Presidencia de un líder indígena como Evo Morales, en 2005, tornaba posible la concreción, en la realidad, de una utopía alimentada subterráneamente por los pueblos indígenas andinos: la toma del poder que les fuera arrebatada cuando la conquista y colonización españolas. Este mesianismo constituye una faceta profunda, subyacente en los movimientos indígenas, incluso en aquel que ha denotado mayor nivel de organización y protagonismo en la escena política, cual es el ecuatoriano. Un imperativo que incluiría un sentido de exclusión con respecto a los sectores no indígenas, mayoritarios por el momento y quizá para siempre. La intuición de una consigna tal en el seno del movimiento indígena, que no pasa de ser un supuesto utópico si analizamos las condiciones políticas, socioculturales, antropológicas y aún geográficas de los países involucrados –fundamentalmente Ecuador, Bolivia y Perú, partes del antiguo Imperio inca, el Tahuantinsuyo–, provoca o puede provocar actitudes de confrontación en ciertos sectores mestizos que no dejan de ser un nuevo elemento perturbador en el espectro general de la crisis. Un factor, además, que se añade a los muchos que lamentablemente han ahondado la fragmentación o fractura social que un país como el Ecuador, eminentemente plurinacional, multicultural y plurilingüe, experimenta, desde siempre, pero en especial ahora, luego de los acontecimientos de octubre de 2019.

Por otro lado, hablo de mesianismo con respecto a la concepción vicaria que de sí mismos tienen determinados líderes, convencidos de que solo ellos son los llamados a gobernar, ya investidos de poderes omnímodos, ya porque necesitan de todo el tiempo para cumplir su misión providencial.

Por otro lado, hablo de mesianismo con respecto a la concepción vicaria que de sí mismos tienen determinados líderes, convencidos de que solo ellos son los llamados a gobernar, ya investidos de poderes omnímodos, ya porque necesitan de todo el tiempo para cumplir su misión providencial. Por extraña coincidencia, tal ha sido el caso de los líderes del denominado socialismo del siglo XXI: Chávez, Ortega, Maduro, Correa, Morales. Lo peculiar y trágico, en algunos de estos casos, es la aparición de una amalgama de factores controvertidos, oscuros e insólitos. Abordemos varios de ellos:

No cabe duda que el auspicioso lema de socialismo del siglo XXI –que en términos generales implicaría un proceso de reformas orientadas a implantar un régimen inclusivo, justo e igualitario utilizando los mecanismos propios de la democracia– ha servido para que las nuevas camarillas en el poder, configuradas alrededor de los líderes nombrados, y estos mismos, logren confundir a amplios sectores de sus propios pueblos mediante consignas evidentemente revolucionarias, contentivas de un profundo mensaje transformador y movilizador, pero que en el fondo, tal el caso de Ecuador, Venezuela y la actual Nicaragua exsandinista, lo que se proponían era disfrazar un régimen de corrupción y articulación elitista del poder, confiscando en beneficio de una minoría mezquina los anhelos de transformación de la población. Pilares de esta política fueron, entre otros, el asistencialismo, necesario para mantener neutralizadas las masas; la dilapidación de los recursos públicos; la corrupción alimentada desde las más altas esferas del poder; la represión a los medios opositores o disidentes: el endiosamiento del líder, encarnado en ocasiones en grandes obras faraónicas e inútiles, o en su comparecencia pertinaz y manipuladora en el escenario de la opinión pública. Una suerte de franquicia forjada en la terrible distopía de que nos habla la novela 1984, de Orwell.

Esta estructura de poder que, según algunos analistas, configuraría un populismo autoritario, con matices fascistas, constituiría, a más de todo lo que significa, una traición a los ideales de una izquierda humanista, interesada en lograr efectivamente una transformación sustentada en valores éticos y en el respeto a las libertades y derechos humanos universales.

Si la política puede juzgarse por sus efectos, lo que se vio en las movilizaciones que tuvieron lugar en el Ecuador en octubre de 2019 fue particularmente una estrategia bien coordinada de ese populismo autoritario pugnando por afianzar, mediante la acción violenta y cuasi terrorista, su regreso al poder. No de otro modo podría conceptuarse la intencionalidad de acciones como el asalto e incendio de la Contraloría

Si la política puede juzgarse por sus efectos, lo que se vio en las movilizaciones que tuvieron lugar en el Ecuador en octubre de 2019 fue particularmente una estrategia bien coordinada de ese populismo autoritario pugnando por afianzar, mediante la acción violenta y cuasi terrorista, su regreso al poder. No de otro modo podría conceptuarse la intencionalidad de acciones como el asalto e incendio de la Contraloría. Lo lamentable es, no tanto la utilización de mercenarios para tales efectos, sino la adscripción de jóvenes y ciudadanos nuevamente confundidos por la propaganda populista, quienes, creyendo apoyar una causa revolucionaria, solo coadyuvan a consolidar y perpetuar en el peor de los casos el poder, y también la impunidad, de los que se aprovecharon mientras fueron gobierno de los fondos públicos para su propio beneficio, en connivencia con sectores económicos y financieros poderosos, beneficiarios a su vez de toda esa trama diversionista y acumuladora de su propio capital.

Lamentable también fue que esa trama pudo o quiso aprovechar de la

movilización indígena y de diversos sectores sociales para lograr sus fines, degradando con ese matiz de violencia selectiva y bien planificada el movimiento general de protesta.

En el próximo futuro cabe esperar un recrudecimiento de esa trama siniestra: los designios del llamado Grupo de Puebla, recientemente conformado por representantes del populismo autoritario y corrupto. Designios que no son otros que el retorno al poder, precautelando los bienes y recursos financieros mal habidos.

En el próximo futuro cabe esperar un recrudecimiento de esa trama siniestra: los designios del llamado Grupo de Puebla, recientemente conformado por representantes del populismo autoritario y corrupto. Designios que no son otros que el retorno al poder, precautelando los bienes y recursos financieros mal habidos.

Nos encontramos entonces, a la hora de visualizar el panorama general de la crisis que experimenta la región andina en su conjunto, con algunos factores que inciden de una u otra manera según las características particulares de cada país. Uno de esos factores constituye sin duda y como queda dicho el estancamiento de la economía y la persistencia de las inequidades e iniquidades en el orden económico y social. Pero en combinación con este factor y los otros ya mencionados podemos señalar otro digno de detenida reflexión para los líderes de opinión pública y los gobernantes: la aparición de sectores ciudadanos mejor preparados, fundamentalmente jóvenes, que exigen un nuevo modelo de desarrollo y de convivencia, que abarque no solo las reivindicaciones economicistas o de clase, sino también las de índole cultural y existencial; una nueva clase de ciudadanos mucho más instruidos, a quienes urge una forma diferente de estructuración de las relaciones sociales y de los comportamientos políticos. Quizás esto explique la virulencia de lo que sucede en Chile, un país con mejores índices en su economía y en la inclusión social en relación con los demás países andinos.

Un aspecto que preocupa en el panorama general de la crisis que contemplamos, particularmente en el área andina, es lo que el periodista Santiago Estrella (El Comercio, 17 de noviembre de 2019, 7) señala como la radicalización hacia extremos irreconciliables de la teoría del péndulo. Según Estrella, "la teoría del péndulo parece que se está cumpliendo en la región con un riesgo fundamental: que la distancia de un punto a otro se extreme hacia radicalizaciones irreconciliables". "En principio –explica–, la alternancia

Según Estrella, "la teoría del péndulo parece que se está cumpliendo en la región con un riesgo fundamental: que la distancia de un punto a otro se extreme hacia radicalizaciones irreconciliables". "En principio –explica–, la alternancia es signo de salud democrática, evita la hegemonía de una sola orientación", pero lo que está sucediendo excede el tradicional comportamiento oscilatorio entre la derecha y la izquierda.

es signo de salud democrática, evita la hegemonía de una sola orientación", pero lo que está sucediendo excede el tradicional comportamiento oscilatorio entre la derecha y la izquierda. En Bolivia, por ejemplo, de la utopía que significaba el Gobierno de Morales, se ha pasado a la extremísima derecha simbolizada por la presidenta interina Jeanine Áñez, quien "exhibe la Biblia como simulado escudo de una batalla inocua y luego rodea la Constitución con la cruz y dos cirios. Se trata más de una cruzada que de una defensa de la democracia", anota Estrella. Similares movimientos extraoscilatorios y radicales pueden verse en Brasil, con el advenimiento del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y hasta en los propios Estados Unidos, con Donald Trump.

Todo lo anterior implica un desafío crucial para los gobiernos y los sectores de opinión y, más que nada, de reflexión, de nuestros países. Como se conoce, toda crisis entraña también una oportunidad y quizás estamos de cara a la posibilidad, quizás la única, de enrumbar en una ruta no solo de inclusión y sensata reforma de las estructuras endémicamente injustas de nuestros países. Es hora de enfrentar radicalmente la consuetudinaria indiferencia de los sectores en el poder ante la trágica situación –económica, social, cultural, existencial– de los sectores pauperizados y, en particular, el proletariado indígena. Una nueva y real reforma agraria, seguramente se hace necesaria. Una renovada intelección de sus particularidades culturales, como por ejemplo su sentido comunitario, se torna indispensable, con miras a un desarrollo equitativo del país en general.

Y en el ámbito internacional, cabe un repensar de los mecanismos de cooperación y concertación existentes,

Y en el ámbito internacional, cabe un repensar de los mecanismos de cooperación y concertación existentes, teniendo en cuenta fracasos como el reciente de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que fue confiscada por un solo interés hegemónico de carácter ideológico, provocando el enfrentamiento interno y su posterior disolución. Es decir, su inviabilidad.

teniendo en cuenta fracasos como el reciente de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que fue confiscada por un solo interés hegemónico de carácter ideológico, provocando el enfrentamiento interno y su posterior disolución. Es decir, su inviabilidad.

La diplomacia tiene ante sí un papel a todas luces clave en los esfuerzos por lograr la superación de los aciagos sucesos que enfrentamos en estos días, en cada país de un modo particular y en la región. Es el momento, quizá, de apelar a las grandes reservas morales que, sin lugar a dudas, persisten y por fortuna están allí, latentes, en cada estamento interno y externo, más allá y por sobre los matices de la más diversa índole: política, étnica, geográfica, lingüística o cultural.

La historia nos lleva hoy, justamente en medio de la crisis, a la posibilidad de un mañana más digno para todos y cada uno de quienes conformamos la raza humana.

Referencias

Estrella, Santiago. 2019. "Una crisis que va más allá de la teoría del péndulo". Diario El Comercio. Quito, 17 de noviembre, Sección Ideas: 7.